HIPOTECA JUDICIAL.*

PROF. ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO

* Véase en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello*, UCAB, Facultad de Derecho, N° 3, (1966-1967), pp. 255-268, Caracas.

CARÁCTER DE LA SENTENCIA QUE DEBE SERVIR DE TÍTULO A LA HIPOTECA JUDICIAL

Doctrina de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo contenida en el fallo de fecha 5 de diciembre de 1963. La sentencia de la Corte Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (Sala Accidental) de fecha 17 de marzo de 1964.

I. ESPECIAL INTERÉS DE LAS DECISIONES COMENTADAS

En primer lugar tienen especial interés las sentencias a que nos referiremos en este análisis, por constituir unas de las pocas decisiones judiciales de nuestro país en esta materia, lo cual de por sí ya justificaría este comentario, y por otra parte, y ello es de mayor relevancia aún, porque resulta ser el fallo de Casación el primero que se pronuncia expresamente en cuanto el carácter de las sentencias susceptibles de servir de título a las hipotecas judiciales según nuestro ordenamiento jurídico.

Además, la doctrina sentada por Casación en el caso concreto viene a contrariar la interpretación que hasta la fecha habían venido dando los tribunales de Instancia al artículo 1.886 del Código Civil, por lo que se refiere concretamente a las sentencias susceptibles de servir de título a las hipotecas judiciales, que precisamente coinciden con la interpretación de dicha norma en la sentencia casada, y con la interpretación que manifiestan los Jueces de la Corte Superior Accidental del Trabajo del Distrito Federal y Estado Miranda, en los considerandos de dicho fallo donde “disienten” de la doctrina del Supremo Tribunal de la República; interpretaciones éstas con las cuales está de acuerdo el suscrito, por

considerarlas ajustadas a la intención de nuestro legislador, y conformes con la doctrina más aceptada en la materia.

Finalmente, también representa especial interés el fallo de la Corte Superior del Trabajo (Accidental) por lo que se refiere al contenido mismo de dicho fallo, y especialmente a lo que la sentencia establece como “derecho a disentir de la doctrina de Casación” y no obstante ello, ordena aplicar el criterio de nuestro Tribunal Supremo, posición con la cual en forma alguna estamos de acuerdo por las consideraciones que se transcribirán en este comentario, las cuales son meros enunciados en esta oportunidad, para evitar salimos del tema central que nos hemos propuesto tratar en este análisis, pero que sin duda alguna sembrarán graves inquietudes en los lectores que nos presten atención.

II. DOCTRINA DE CASACIÓN RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE ATRIBUIRSE A LA EXPRESIÓN “SENTENCIA EJECUTORIADA” EN EL ARTÍCULO 1.886 DEL CÓDIGO CIVIL

En este capítulo nos permitiremos resumir los considerandos que llevaron a nuestra Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo a dictar la doctrina en referencia, y el contenido de la misma, en su fallo de fecha 5-XII-1963, remitiendo al lector interesado a consultar la totalidad del mismo en la fuente.¹

Sostiene la sentencia: “Estima en consecuencia esta Sala que en el artículo 1.886 del Código Civil, así como en los artículos 415, 443 y 448 del Código de Procedimiento Civil, la expresión “sentencia ejecutoriada” no tiene la significación de sentencia definitivamente firme, sino la sentencia no susceptible de ser atacada mediante el recurso ordinario de apelación.

La mencionada doctrina se sienta con fundamento a la denuncia formalizada por la parte interesada, concebida en los siguientes términos: “... los sentenciadores confunden el concepto de “sentencia ejecutoriada” con el de sentencia definitivamente firme pasada en autoridad

¹ Véase la transcripción parcial de dicho fallo en la sentencia N° 322-63, p. 409, tomo VIII, año 1963, segundo semestre, Jurisprudencia de Ramírez & Garay, Editorial Ramírez y Garay, S.A Caracas 1966.

de cosa juzgada; y que el artículo 1.886 del Código Civil no admite interpretaciones reñidas con el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador, al tenor del artículo 4º del Código Civil citado”.

Por supuesto que la sentencia impugnada sostuvo que “la sentencia ejecutoriada de que trata el artículo citado (sic. 1.886 C.C.) es la sentencia definitivamente firme contra la cual no existía recurso alguno”.

Los argumentos invocados por nuestro Tribunal Supremo los copiamos de seguidas: “Es lo cierto que esa expresión (sic. “sentencia ejecutoriada”) no tiene en la legislación venezolana una significación precisa, pues unas veces la emplea el legislador con relación a los fallos no susceptibles de ser impugnados por el recurso ordinario de apelación, y en otras ocasiones, en el sentido de sentencia definitivamente firme, esto es, no es atacable ni mediante el recurso ordinario de apelación ni tampoco mediante el recurso extraordinario de casación”. A tal efecto, nuestra Corte Suprema entiende que en el artículo 1.886 C.C. la expresión “sentencia ejecutoriada”, viene empleada en el primero de los sentidos mencionados antes, esto es, aquella sentencia no susceptible de ser impugnada por el recurso ordinario de apelación, lo cual apoya en un argumento histórico y en la misma interpretación que al respecto trae nuestro comentarista patrio Aníbal Dominici.²

Por virtud de la referida doctrina, aplicada como veremos luego al caso concreto por el fallo de la Corte Accidental Superior del Trabajo del D.F. y E.M. de fecha 17-3-1964, quiere decir que toda sentencia contra la cual se hubiere agotado el recurso ordinario de apelación, es susceptible de producir hipoteca judicial y será éste³ el criterio que en principio deberán aplicar nuestros tribunales de instancia cuando se les solicite la constitución de hipotecas judiciales.

Como consecuencia de este fallo, evidentemente que la institución de la hipoteca judicial en nuestro ordenamiento jurídico deja de ser una institución que garantiza la ejecución de los fallos que producen cosa

² DOMINICI, ANIBAL. Comentarios al Código Civil Venezolano, tomo IV, pág. 319, Editorial Logos, C.A., Reproducción offset del original de Primera Edición, Caracas, 1951.

³ Al menos moralmente debe sostenerse que existe esta vinculación para los jueces de instancia, puesto que sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina de casación sólo es obligatoria para el caso concreto.

juzgada, definitivamente firmes, interpretación esta que había sido la que se aplicaba con anterioridad a la decisión de Casación, para convertirse en una providencia cautelar más, propia de tales sentencias⁴, y por consiguiente susceptible de quedar sin efecto en el curso subsiguiente del juicio por la revocación del fallo consecuencial a la declaratoria con lugar del recurso de casación eventualmente interpuesto contra el mismo.

Igualmente, con tal interpretación de la norma comentada se estarían creando privilegios no consentidos por la Ley a los acreedores quirografarios, que por el sólo hecho de haber sido más diligentes que los demás en la reclamación de su crédito encontrarían una causa de preferencia para el pago de sus créditos, mediante la obtención de una sentencia, que podría estar sometida para el momento de la declaratoria de la quiebra a la revisión de Casación, y por supuesto que en este caso cabría plenamente la crítica que en este mismo sentido se ha hecho a la institución de la hipoteca judicial, motivo por el cual incluso ha sido abolida la institución en algunas legislaciones como la belga⁵ y objeto de fuerte oposición el que se le mantenga dentro de otras legislaciones, en oportunidades en que se ha planteado la reforma de los códigos que la consagran.⁶

Pero lo más importante de esta decisión, es que los fundamentos de la misma vienen reñidos absolutamente con normas de nuestro Código Civil, pues si bien es cierto, como lo observa el fallo de Casación, que la expresión sentencia ejecutoriada, no tiene en la legislación venezolana (y creo que debería precisarse: en la “procesal”) una significación

⁴ Las sentencias contra las cuales no puede intentarse el recurso ordinario de apelación, sea por haberse agotado el mismo con su ejercicio, o por no haberse ejercido aquél en tiempo oportuno.

⁵ *Ley belga de 16-XII-1851*, *Ley de Ginebra de 6-I-1851*; e igualmente en Portugal y España, citadas por Ripert Boulanger, Tratado de Derecho Civil según el tratado de Planiol, pág. 387, tomo VII, Derechos Reales, segunda parte, Editorial La Ley, Argentina, 1965.

⁶ En Francia: (Reforma de 1850) ...la hipoteca judicial modifica injustamente la situación respectiva de los acreedores, haciendo nacer a favor de quien obtiene sentencias en primer término, una causa de preferencia sobre los demás. El pago es en consecuencia, “el precio de la diligencia”. (VALETTE, discurso del 28 de diciembre de 1850). Cita de Ripert - Boulanger, opus cit., pág. 386.

En Italia, en igual sentido se pronunciaba CHIESE, citado por BRUNO, Tomasso, en voz HIPOTECA, 11 Digesto Italiano, Volume Tredicesimo, Torino 1927, pág. 398, N° 163.

precisa, lo cierto es que existe en nuestro Código Civil normas y principios generales, –(como bien anotan los Sentenciadores de la Corte Accidental del Trabajo)–, que no dejan lugar a dudas en cuanto a la interpretación de la expresión “sentencia ejecutoriada” en nuestro ordenamiento sustantivo, en el sentido de que la misma se refiere a aquellas sentencias “definitivamente firmes, no susceptibles de ningún género de impugnación”. Nos reservamos presentar la argumentación correspondiente a este respecto al ir comentando el fallo de la Corte Accidental del Trabajo⁷ en la opinión en que disienten los jueces sentenciadores de la doctrina de Casación.

Finalmente, queremos dejar expresado nuestro criterio por lo que se refiere a la actual regulación de la hipoteca judicial, en el sentido de que entendemos, salvo la eventual justificación que pueda hacerse a la institución, con base a la ventaja que representa para el acreedor poder esperar para cobrar su crédito, en oportunidades en que el mercado le ofrezca mejor posibilidades de venta del inmueble de su deudor, y la no necesidad de una inmediata ejecución de su deudor, con todas las garantías de que su crédito será cobrado satisfactoriamente⁸, que en el futuro la hipoteca judicial debe regulársela de modo tal que pueda considerársela en realidad como una medida conservatoria,⁹ y es en tal sentido que estaríamos en cierto modo de acuerdo con el efecto final que debe deducirse de la doctrina del fallo de Casación que hemos comentado antes.

Para el caso de que en el futuro nuestro legislador adoptara tal criterio¹⁰, consideramos así mismo que deberíamos volver al sistema del

⁷ Véanse al respecto las opiniones sostenidas por los autores RIPERT-BOULANGER, opus cit., pág. 386. Y en igual sentido PESCATORE, citado por BRUNO, Tomasso, opus cit., pág. 399; MARTY, Gabriel, Derecho Civil, Garantías Accesorias, Editorial Cajica, México 1952, especialmente pág. 265.

⁸ Claro está, tomando las providencias necesarias para dejar a salvo los derechos de otros acreedores, y respetando el principio de igualdad de los acreedores, para lo cual el Legislador tendría que adoptar medidas especiales.

⁹ Esta ha sido la solución adoptada en la práctica por la Jurisprudencia Belga, bajo otra forma: condena del deudor a constituir una hipoteca dentro de un plazo dado, bajo pena de daños y perjuicios. Véase RIPERT-BOULANGER, opus cit., pág. 387.

¹⁰ Decreto Ley de 4-I-1955, vigente en Francia, citado por RIPERT-BOULANGER, opus cit., pág. 385, que también coincide prácticamente con el sistema italiano actual, artículo 2.818 del Código Civil Italiano 1942.

Código de 1873, siguiendo el modelo francés¹¹, con lo cual la hipoteca judicial podría ser solicitada con el fallo dictado aun en la primera instancia, todo lo cual llevaría en la práctica a utilizar más esta institución, hoy en día prácticamente desterrada de nuestra práctica forense.

III. SENTENCIA DE LA CORTE ACCIDENTAL SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA QUE ORDENA APLICAR LA DOCTRINA DE CASACIÓN ANTERIORMENTE COMENTADA

Con fecha 17 de marzo de 1964, la referida Corte Accidental Superior, constituida conforme lo dispuesto en los artículos 436 del C.P.C. y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procedió a dictar la correspondiente sentencia, acatando la doctrina de Casación, y ordenando constituir la hipoteca judicial.

Este fallo, como decíamos al comienzo de este trabajo, reviste una peculiaridad muy especial, pues en la primera parte de sus considerandos, no obstante declarar expresamente el acatamiento y respeto a la doctrina del Tribunal Supremo, disienten de la misma,¹² a lo cual, según sostiene la Corte Superior Accidental, “tienen derecho”.

Precisamente, en esto que llamaremos “una especie de VOTO SALVADO” de la Corte en referencia, los sentenciadores se apartan de un todo del criterio sustentado por Casación en cuanto a la interpretación de la expresión “sentencia ejecutoriada” contenida en el artículo 1.886 del Código Civil, y que como igualmente decíamos anteriormente, consideramos es el criterio ajustado a nuestro ordenamiento positivo, y nos adherimos en un todo a los argumentos invocados en tal sentido por los juzgadores.

A los efectos del análisis de este fallo, y puesto que ya hemos dejado dicho que el mismo aplica en un todo la doctrina de Casación, nos limitaremos a examinar especialmente los argumentos de los senten-

¹¹ Véase transcripción parcial del fallo comentado en sentencia N° 97-64, pág. 273, tomo IX, año 1964, primer semestre, Jurisprudencia Ramírez & Garay, Editorial Ramírez & Garay, S.A., Caracas, 1966, en su primer considerando.

¹² Y en consecuencia no susceptible de aplicaciones analógicas.

ciadores en cuanto disienten de nuestro Supremo Tribunal, en primer término, haciéndole los correspondientes comentarios, y en segundo lugar, haremos algunas consideraciones respecto al pretendido “derecho de disentir” que invocan los sentenciadores, para expresar su criterio en contra de la doctrina de Casación.

Interpretación de la expresión “sentencia ejecutoriada” en el artículo 1.886 C.C. según los sentenciadores de la Corte Superior Accidental del Trabajo del D.F. y E.M.

Podemos clasificar en dos los tipos de argumentos utilizados por la Corte Superior Accidental: 1) Uno de carácter netamente procesal, según los cuales por la propia voluntad del legislador procesal, la expresión “sentencia ejecutoriada” no siempre tiene el significado de sentencia contra la cual no sea susceptible la impugnación por el recurso ordinario de apelación, y concretamente, cuando se refiere a disposiciones que versan sobre la ejecución de los fallos, propiamente dicha, la referida expresión conlleva el concepto de la cosa juzgada, el de sentencia definitivamente firme, y en consecuencia, siendo la hipoteca judicial en nuestro ordenamiento “un acto de ejecución”, es sólo este tipo de sentencias la que puede servir de título a tal hipoteca;

2) Los otros, son de carácter sustancial, y se deducen de varias disposiciones del Código Civil, en las cuales necesariamente debe interpretarse que la expresión sentencia ejecutoriada contenida en el artículo 1.886 C.C., y en otros del mismo Código, hacen referencia exclusivamente a las sentencias contra las cuales se han agotado tanto los recursos ordinarios, como el extraordinario de Casación, y por supuesto, que siendo el Código Civil posterior en fecha al de Procedimiento Civil, es evidente que la norma aplicable, y el sentido que debe atribuirse a la citada expresión es el que resulta de la voluntad del Legislador del Código Civil.

Veamos estos argumentos:

A. De tipo procesal:

Sostiene la Corte: I.—“El artículo 415 del Código de Procedimiento Civil establece que la sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando sea conforme con la de primera”; y agrega que “si se admitiere

recurso de casación contra la sentencia que quede ejecutoriada, se le dará curso”. Y la secuela procesal de la norma anterior la determina el artículo 443 ejusdem al consagrar que “pendiente el recurso de casación, el Juez o Tribunal ante el cual se haya anunciado, dictará, a solicitud de la parte interesada, todas las medidas preventivas necesarias, a fin de que no se haga ilusoria la ejecución de la sentencia contra la cual se haya intentado. Al efecto la parte favorecida por la sentencia definitiva ejecutoriada podrá pedir que se verifiquen los actos de embargo de bienes suficientes, los avalúos y demás diligencias de ejecución, con excepción de los de remate y adjudicación de bienes aún a la misma parte favorecida. Estos últimos actos quedarán diferidos hasta la decisión del recurso de casación, y, de consiguiente subordinados a lo que en el fallo de dicho recurso se decida.

Como se observa, efectivamente, aquí la norma hace referencia a la sentencia contra la cual se han agotado los medios normales de impugnación (apelación), y contra la cual se ha anunciado el recurso de casación, en este sentido es que aquí se habla de sentencia ejecutoriada. El legislador en este caso, permite a la parte solicitar y obtener medidas “preventivas”, “conservatorias”, al punto que expresamente deja a salvo entre las providencias que pueden llevarse a cabo, aquellas que entrañen la “EJECUCI’PN”.

Si entre estas medidas pudiera incluirse la de solicitar la hipoteca judicial, llegaríamos al absurdo de tener que concluir con que si la parte a cuyo favor se ordenó la constitución de la hipoteca judicial comenzará el juicio de ejecución de la misma, este procedimiento debería interrumpirse, hasta tanto fuera pronunciado el fallo de casación, puesto que tal derecho de intentar la ejecución asiste al acreedor favorecido por la hipoteca, pero no podríamos llegar tampoco al error de sostener que mientras se suspenden las vías de ejecución de sentencia ordinaria (remate, adjudicación), no tienen porque paralizarse las de ejecución de hipoteca constituida en ejecución del fallo.

Continúa la Corte: ...“No es lo anterior, no puede serlo en manera alguna, lo mismo que, en el Título VII (Libro Segundo, relativo al juicio ordinario), cuando trata “De la ejecución de la sentencia”, estatuye el Código de Procedimiento Civil. En efecto, el artículo 446 dice que: “El juez a quien toque el conocimiento de la causa en primera instancia...

cumplirá la sentencia ejecutoriada o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal”; y el artículo 448 dice: “cuando la sentencia ejecutoriada haya quedado definitivamente firme, el Tribunal pondrá un decreto mandándola a ejecutar”. En este caso se trata de la sentencia definitivamente firme ejecutoriada (subrayado nuestro), es decir, pasada en autoridad de cosa juzgada, contra la cual no existe ningún recurso, ni ordinario, ni extraordinario. Pero en el caso anterior es distinto, esa, “sentencia definitiva ejecutoriada” no tiene el carácter de cosa juzgada, ya que contra la misma está pendiente el recurso de casación; y si bien es cierto que el legislador, al referirse a la misma, emplea los términos de “sentencia definitiva o ejecutoriada”, ello en absoluto puede interpretarse en el mismo sentido de cuando en el Título VII, al referirse a la ejecución de la sentencia, emplea también los términos de sentencia “ejecutoriada” y “cuando la sentencia ejecutoriada haya quedado definitivamente firme”.

Bastaría, para que en forma meridiana aparezca la diferencia entre uno y otro instituto procesal, con señalar que, cuando está pendiente el recurso de casación, el legislador solamente concede al actor el derecho a pedir que “se verifiquen los actos de embargo de bienes” (artículo 443); únicamente embargo que es “embargo ejecutivo”, aun cuando la norma se refiere a “medidas preventivas”, y se practican todas las diligencias de ejecución, pero las mismas exceptúan los actos de remate y de adjudicación de bienes, porque éstos quedan diferidos hasta la decisión del recurso de casación, que puede ser adverso y entonces ese “embargo ejecutivo”, que tuvo solamente el carácter de “una medida conservatoria” y no de un acto de ejecución, propiamente dicho, desaparece completamente, pierde todo su efecto o valor jurídico, es como si no hubiese existido jamás. Lo cual no ocurre en la otra situación, porque allí si se trata de la ejecución de una sentencia definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada y los actos de remate que se realicen en virtud de esa ejecución y los subsiguientes, tienen un carácter irrevocable, a fin de que el acreedor, –actor en el juicio–, se pague con los bienes del deudor, –demandado que ha sido condenado–, y quien no tiene ningún recurso para oponerse al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada.

Todo lo anteriormente expresado es válido máxime si se examina a la luz del contenido del artículo 187 del Código de Procedimiento

Civil que estatuye: “La sentencia de la tercera instancia (de segundo grado, en nuestro actual ordenamiento procesal) quedará en todo caso ejecutoriada, a menos que se intentare y fuere admisible contra ella el recurso de casación”. De consiguiente, es claro que, cuando el artículo 415 establece que “la sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando sea conforme con la de primera”, lo cual permite solicitar las medidas preventivas de “embargo de bienes” “a la parte favorecida con la sentencia ejecutoriada (Artículo 443) se trata de una sentencia ejecutoriada contra la cual está pendiente el recurso de casación y no de la sentencia que queda ejecutoriada, es decir, definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, porque no se ha intentado este recurso extraordinario, –u otro que la ley consagre–, porque todo recurso ha quedado terminado dentro del ordenamiento procesal, o porque cualquier recurso interpuesto ha sido declarado sin lugar”.

Finalmente y para concluir, en esta parte, la Corte Superior Accidental, hace unos considerandos de tipo histórico en cuanto a la evolución de la norma del artículo 1.886, para concluir diferenciando las medidas conservatorias propiamente dichas (Artículo 443) de la hipoteca judicial, lo cual quedó definitivamente claro a partir de 1896, pero a nuestro parecer los mismos no son de mayor importancia, a excepción del que pudiera deducirse del hecho de que siendo la norma del artículo 443 del C.P.C. una norma de excepción¹³ al principio de que al dictar su fallo el Juez pierde toda jurisdicción sobre el caso, y no estando mencionada dentro de las medidas que puede dictar el Juez la hipoteca judicial, no es factible pretender que dentro de tales medidas preventivas,, conservatorias, también se encuentre incluida la de ordenar la constitución de la hipoteca judicial.

Dice la Corte, efectivamente: ...“Pero cuando el Legislador, el principio de toda sentencia que condena, lo modificó en el sentido de “toda sentencia ejecutoriada que condena” y dejó vigente en el Código de Procedimiento Civil el derecho del actor, a solicitar, pendiente el recurso de casación, todas las medidas preventivas necesarias, pidiendo esa parte favorecida por la sentencia definitiva ejecutoriada, embargo de bienes, es evidente que estableció dos procedimientos radicalmente

¹³ Véase el fallo citado (11), pág. 275 en Jurisprudencia Ramírez & Garay, opus cit.

diferentes. Uno, el del embargo de bienes, pendiente el recurso de casación; y el otro el de la hipoteca judicial cuando exista sentencia ejecutoriada, esto es, definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada: Porque no debe olvidarse que el juez al dictar su fallo, pierde toda jurisdicción en el proceso. En este caso, la Ley se la atribuye, de manera expresa, para que pueda acordar embargo de bienes, exclusivamente eso, no para que acuerde una hipoteca judicial, para lo cual carece de facultad, pues ha perdido su jurisdicción en la causa”.

“Por otra parte, contra el embargo de bienes que autoriza el artículo 443 citado, puede ejercerse el derecho de oposición, o actuarse por la vía de tercería. Lo cual no ocurre en el caso de la hipoteca judicial. Y es más, para evidenciar lo correcto de la interpretación que se le está dando a los textos legales, supongamos el caso de que, pendiente el recurso de casación, acaezca la quiebra del demandado. El juicio de quiebra por ser universal, arrastra tras sí todos los juicios existentes contra el fallido. Si existe una medida de embargo de bienes, el actor concurre a la quiebra en igualdad de condiciones con todos los demás acreedores (nos referimos en tesis general, pues en materia laboral existe un privilegio, independientemente de las medidas dictadas, a favor del trabajador), sin privilegio de ninguna clase. Situación que no ocurriría –sí, en lugar del embargo de bienes que es lo único que la ley autoriza, se hubiese constituido una hipoteca judicial. En este caso el actor concurriría a la quiebra en situación privilegiada, lo cual estaría reñido con las más elementales normas de equidad y de justicia”.

B. De tipo sustancial:

Sostiene la Corte Superior Accidental a este respecto: I.—¹⁴ “El Código Civil es una ley sustantiva que consagra derechos, que establece normas. Por ello, cuando se refiere a las consecuencias de una sentencia, le bastaría con decir simplemente “sentencia”, ya que por ello debe entenderse que se trata de la sentencia definitivamente firme, de la sentencia ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada. Lo

¹⁴ Remitimos al lector interesado a la lectura de los considerandos históricos de los sentenciadores que preceden estos argumentos, en el fallo comentado, Ramírez & Garay, tomo IX, pág. 274 y ss.

demás corresponde reglamentarlo, por así decirlo, a la ley adjetiva: el Código de Procedimiento Civil”.

“De allí que, cuando el Código Civil se refiere a sentencia ejecutoriada, la misma es, exclusivamente la sentencia definitivamente firme, contra la cual no existe recurso, ni ordinario ni extraordinario. Así, por ejemplo, lo vemos en el artículo 128, cuando dice: que “ejecutoriada la sentencia que anula el matrimonio”; o en el artículo 475, cuando expresa que “también se insertará la sentencia ejecutoriada que declara la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen de la partida correspondiente”. Y para que no quede duda alguna al respecto, en la reforma de 1942, al establecer diversas normas de orden público, en relación con el estado y capacidad de las personas, ya el legislador para referirse a la sentencia ejecutoriada, en el artículo 507 del Código Civil, dijo: “Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado civil y capacidad de las personas”. Por manera que, cuando el artículo 1.886 establece que “toda sentencia ejecutoriada que condene al pago de una cantidad determinada, ...produce hipoteca sobre los bienes del deudor...”, es evidente que está determinando la “sentencia definitivamente firme”.

II.—¹⁵ Continúa la Corte: “...Además, el Código Civil al establecer cuáles son los títulos que deben registrarse, no deja lugar a dudas en relación con el criterio que se viene sosteniendo. En efecto, los numerales 7º y 8º del artículo 1.920 consagra que, están sometidos a la formalidad del registro, “los actos y las sentencias de los cuales resulte la liberación o la cesión de alquileres o de rentas aún no vencidas, por un término que exceda de un año”, y “las sentencias que declaren la existencia de una convención verbal de la naturaleza de las enunciadas en los números precedentes”. Habla, pues, la ley sustantiva solamente de “sentencia”, y aun cuando el artículo 1.922 ejusdem, consagra que “toda sentencia ejecutoriada que pronuncie la nulidad, la resolución, la rescisión o la revocación de un acto registrado, debe registrarse, y se hará referencia de ella al margen del acto a que aluda” necesariamente hay que concluir que esta sentencia ejecutoriada, —como se desprende— del propio contenido de la disposición—, es la sentencia definitivamente firme, contra la cual no existe recurso alguno para impugnarla o dejarla sin los efectos

¹⁵ Supra II, encabezamiento.

que ha establecido. Ya que sería inoperante el registro de un acto que posteriormente puede carecer de eficacia, si pendiente un recurso contra el mismo, es revocado y anuladas sus consecuencias jurídicas. Y el legislador no consagra nada inoperante o superfluo”.

La claridad de los argumentos expuestos por los sentenciadores no requieren comentario de ninguna especie, y creo que no dejan la menor duda sobre la mente del jurista para concluir definitivamente con que la sentencia “ejecutoriada” a que se refiere nuestro artículo 1.886 ejusdem, es la sentencia definitivamente firme, contra la cual no cabe recurso ordinario o extraordinario, y en tal sentido, como decíamos anteriormente, la institución de la hipoteca judicial recobra su carácter de “acto de ejecución” y no de medida conservatoria, como resultará de la aplicación de la doctrina de Casación a que nos hemos referido en este análisis.

Consideraciones generales acerca del derecho invocado por los sentenciadores de la Corte Superior Accidental, de disentir de la doctrina dictada por Casación.

Como decíamos al comienzo de este capítulo¹⁶ en el fallo que ahora comentamos, y con el objeto de formular los razonamientos que hemos transcrito inmediatamente con anterioridad, la Corte Superior Accidental, no obstante ordenar aplicar la doctrina de Casación en la interpretación correspondiente del artículo 1.886 del Código Civil, “se permite disentir” de la doctrina del Supremo Tribunal, “a lo cual tienen derecho” según sostiene la sentencia.

Esta situación realmente nos parece reñida con el contenido del artículo 439 del C.P.C., y especialmente con el hecho de que no obstante manifestar los sentenciadores su parecer contrario a la doctrina de Casación y prácticamente emitiendo opinión contraria antes de ordenar la aplicación del criterio de nuestro Tribunal Supremo, proceden a aplicar lo dispuesto en la sentencia de Casación.

Como Calamandrei¹⁷, entendemos que la disposición del artículo 439 del C.P.C. no permite a los jueces de instancia otra alternativa dis-

¹⁶ CALAMANDREI, Piero, Casación Civil, traducción de Santiago Sentis Melendo y Mariano Ayerra R., Colección Breviarios de Derecho, N° 27, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1959, pp 184 y ss., en especial N° 60.

¹⁷ CALAMANDREI, Piero, opus cit., pág. 208.

tinta a la de aplicar la norma jurídica en la forma que ordena el fallo de Casación, particularmente en los casos en que el pronunciamiento de Casación ha sido fundamentado en errores “in procedendo” de la sentencia casada, e igualmente en aquellos casos de errores “in iudicando”, cuando Casación expresamente se ha pronunciado sobre la correcta interpretación y aplicación que debe darse a una norma de carácter sustancial en el caso concreto¹⁸, y esto es lo que nuestro legislador ha consagrado indirectamente en el artículo 436 del C.P.C.

Concretamente en el caso que nos ocupa, consideramos que ese –derecho a disentir– invocado por los sentenciadores de la Corte–, es inexistente, para los casos en que los jueces están fallando a los solos efectos del artículo 436 del C.P.C. (lo que se denomina en otras legislaciones y en doctrina extranjera “juicio de reenvío”)- Efectivamente, estando los jueces de instancia obligados a acatar lo resuelto en el fallo de Casación (artículo 438 C.P.C.), salvo el caso de abierta “rebelión” a la doctrina de Casación, en cuyo caso será procedente el recurso de nulidad (previsto en dicha norma), los jueces no tienen modo o forma de manifestar su criterio en contra, en cierto sentido, por así decirlo, los jueces en estos casos pierden su independencia soberana (característica de los órganos del Poder Judicial), para convertirse en órganos subordinados a la decisión del Supremo Tribunal de la República, en ese concreto caso.

Claro está, repetimos, no estamos considerando el caso de incorrecta aplicación de la doctrina (por mala aplicación de la ley, o por falta de aplicación de la misma), en los casos de rebelión, cuando la casación se hubiese hecho por errores “in iudicando” sobre una norma de derecho procesal, o cuando se trata de errores “in iudicando” cuando se refieren a cuestiones de derecho diversas de aquellas en que se funde el primer recurso, que no son por cierto los supuestos del caso que nos ha ocupado en este análisis, pues tales situaciones dan lugar a lo que nuestra Corte de Casación admite hoy como “Segunda Casación”, y llamada por Calamandrei con forma a la legislación Italiana “segundo reenvío”.

Para concluir, ya que no es este el objeto particular de este análisis, creemos que el único derecho que teman los jueces sentenciadores de la

¹⁸ CALAMANDREI, Piero, opus cit., pág. 209.

Corte Superior Accidental del Trabajo del D.F. y E.M. en el caso objeto de análisis, era el de inhibirse de conocer del asunto, pero no el establecer como premisa de un fallo (obsérvese que no decimos fundamento lo que prácticamente constituye un “voto salvado” al ordenar ejecutar el fallo de Casación).

Dejamos este problema planteado con la esperanza de que nosotros, o algún otro interesado en la materia, desarrolle en el futuro este apasionante tema.